

Por presencia militar Comunidad de Paz construye un nuevo pueblo

Por Isabel Sánchez
Bogotá, AFP

Habitantes de una comunidad del noroeste de Colombia, donde hace un mes fueron masacrados cuatro menores y cinco adultos, comenzaron a construir un nuevo pueblo donde asentarse, en rechazo a la orden dada el domingo por el Presidente Álvaro Uribe para que en 20 días entre la fuerza pública a esa zona.

Un mes después de la masacre en la comunidad de paz de San José de Apartadó, cuya responsabilidad aún no ha sido esclarecida, la fuerza pública empezará su desplazamiento hacia esa población, que hace exactamente ocho años se declaró en resistencia pacífica y "neutral" frente al conflicto armado.

Pero mientras el Ejército acata la orden presidencial, los habitantes, que hace diez días iniciaron la construcción de un nuevo caserío para trasladarse, advirtieron que comenzarán a abandonar la comunidad por considerar que el gobierno viola, con la medida, su declaración de neutralidad.

Humildes viviendas de zinc y madera están siendo levantadas a pocos kilómetros del casco urbano de San José de Apartadó, cerca de una carretera y en las riberas de un río.

Las construcciones se aceleraron luego de que Uribe afirmara el domingo que ningún rincón de la geografía colombiana debe estar vedado a la fuerza pública.

Ese día, en la sede de la XVII Brigada del Ejército, Uribe aseguró que en San José de Apartadó "algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados, por personas que han residido allí, de auxiliar a las Farc".

Las acusaciones de Uribe fueron rechazadas categóricamente por la comunidad, que en un comunicado señaló que la actitud del Presidente "ofende la conciencia ética de la humanidad y la memoria de las víctimas".

"Es muy grave que el Presidente haya guardado silencio durante un mes y cuando habló no condenó la masacre, sino que lo hizo para ofender", afirmó la ex Alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, una activista de derechos humanos de la comunidad de paz.

Cuartas y otros dirigentes de la comunidad acusan al Ejército, precisamente a miembros de la Brigada XVII, de la masacre; el gobierno y las Fuerzas Militares señalan a guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), mientras que las primeras versiones responsabilizaban a los paramilitares.

La ex Alcaldesa hizo ayer una férrea defensa de la resistencia de los pobladores a la presencia del Ejército en el casco urbano de San José de Apartadó, porque afirmó actúa en conjunto con los paramilitares de extrema derecha.

"Hasta que no se desmonte la estrategia militar-paramilitar de la región, nosotros, la comunidad y los acompañantes, gente que está apoyando a la comunidad desde otras regiones del mundo, no diferenciamos militares de paramilitares", afirmó.

Según ella, la Fuerza Pública no tiene "autoridad moral" para ingresar a San José de Apartadó cuando en su retén le destruyen la comida a los campesinos, le quitan el dinero de venta de las cosechas, violan a las mujeres.

Ante la gravedad de la situación el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, el director de la Pastoral Social, Monseñor Héctor Fabio Henao, y representantes de las agencias de la ONU en Colombia solicitaron a Uribe una reunión para evaluar la conveniencia de las medidas que dictó.

"Ellos han sido víctimas de las acciones de los grupos violentos a lo largo de los años, por eso queremos recomendarle al gobierno que obre con la mayor responsabilidad, cuidado y sensatez, porque podría generarse una situación de choque con la comunidad", declaró Pérez este martes.

Desde que San José de Apartadó se constituyó en territorio de paz, unos 160 habitantes han sido asesinados, según organismos humanitarios, pese a que hace cinco años la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al gobierno que diera protección especial a esa comunidad.

Ante la inminente llegada de la fuerza pública a San José de Apartadó para retomar el control en esa región, sus habitantes ya están construyendo casas fuera de la localidad.

Iglesia pide aceptar a los militares

Por Margarita Martínez
Bogotá, AP

La Iglesia Católica pidió a la comunidad de paz de San José de Apartadó que acepte la presencia estatal y no obstaculice la labor de la justicia, ante la decisión presidencial de que el ejército ingrese a la población, que se ha declarado neutral ante los grupos armados.

"Hubiera preferido que hubieran empezado con la parte civil del Estado y no la militar, pero donde manda capitán no manda marinero", dijo ayer el Obispo de Apartadó, Monseñor Germán García, en declaraciones a la prensa local.

El religioso afirmó que la comunidad de paz, creada en 1997 como reacción contra las matanzas y acciones de guerrillas y paramilitares, debe prestar ayuda con testimonios a los fiscales que investigan la masacre de ocho personas cometida por hombres uniformados que usaron machetes y fusiles.

La polémica con la comunidad de paz empezó hace un mes, luego del asesinato de las ocho personas de la población, entre ellas tres niños.

Los habitantes, un sacerdote y la ex Alcaldesa de Apartadó, acusaron al ejército por los asesinatos.

Pero los habitantes de la comunidad se negaron a prestar declaración a la fiscalía, alegando que 165 personas de la población han sido asesinadas desde su creación y que

los casos permanecen en la impunidad. Además, los que han testificado en el pasado contra autoridades han sido perseguidos.

Las fuerzas militares negaron su participación en los homicidios cometidos en esa aldea ubicada a 440 kilómetros al noroeste de Bogotá.

El gobierno del Álvaro Uribe ordenó que el ejército entre en el poblado donde viven unas 1.300 personas. Los líderes comunitarios han advertido que si entra un grupo armado, como el ejército, abandonarán la zona porque ellos no pueden ir contra su principio de neutralidad.

La oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pidió ayer protección para los pobladores, pero al mismo tiempo les sugirió que acepten a las autoridades, que son necesarias para "garantizar y proteger los derechos fundamentales de todos los que habitan en el país".

También la ONU exigió que se acabe la matanza del 21 de febrero y señaló que confía en la labor de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

La ONU "confía también en que los miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó prestarán su colaboración a las autoridades judiciales encargadas del proceso, y que éstas garantizarán la seguridad y la tranquilidad de los testigos y familiares de las víctimas", afirmó un comunicado de prensa.